



DIVISIÓN DEFENSA ESTATAL

OF. ORD N° 6490 /

ANT. : Solicitud de acceso a información pública.

MAT.: Responde solicitud de información N° AX001T0000049, de fecha 13 de noviembre de 2015.

SANTIAGO, [14 DIC 2015,

A : SR. CARLOS QUEZADA VILLACURA

DE : PRESIDENTA SUBROGANTE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Por la solicitud de la materia, Ud. ha pedido: "Por este acto, vengo en solicitar a CDE tenga a bien entregar a esta parte en mi calidad de demandante y afectado la siguiente información: 1.-Copia de toda información que guarde o diga relación con sumario administrativo que motivo mi baja de filas institucionales de Carabineros de Chile, tras haber asumido CDE defensa en juicios seguidos ante 17 Juzgado Civil de Santiago causa -Expediente Rol N° 17.162-2011, caratulado "DUQUE SANTOS, ALDO con FISCO DE CHILE" por entender esta parte que CDE habría en año 2011 solicitado copia de sumario administrativo que motivo la baja de quien suscribe para contestación de demanda y antecedentes solicitados por CDE en año 201. 2.-Copia de toda información que guarde o diga relación relativa a documentación de quien suscribe respecto a documentos relativos a sumario administrativo que motivo mi baja que eventualmente podría tener CDE, información publica, por encontrarse afinado y afirme mi baja de las filas desde año 2006 por defensa que Fisco (CDE) mantiene en 28 Juzgado Civil de Santiago causa Rol C-17605-12 en autos caratulados "QUEZADA/FISCO DE CHILE". Sin otro particular saluda. CARLOS IVAN QUEZADA VILLACURA."

Al respecto, en relación a los antecedentes requeridos en el numeral primero de su solicitud informo a usted que no es posible para este Servicio hacer entrega de la información solicitada, ya que se trata de información reservada en virtud de las siguientes causales contempladas en el artículo 21 de la Ley N° 20.285:

1.- Causal contemplada en el artículo 21 N° 1 letra a), que señala: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".

En efecto, la publicidad de la información requerida constituye un riesgo cierto para la estrategia judicial de los intereses del Fisco de Chile, por cuanto incide en una causa que se encuentra en actual tramitación en este Servicio, por lo que su divulgación podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de este órgano, en cuanto a los pasos y acciones legales a seguir en dicho asunto.

2.- Causal contemplada en el artículo 21 N° 5, que señala: "Cuando se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República".

En efecto, lo que usted pide son antecedentes propios del cumplimiento de las tareas que la ley encomienda al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo que dicha reserva se encuentra amparada por el secreto profesional del abogado.

El secreto profesional, además de su consagración en diversos cuerpos legales como el Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Procedimiento Civil, emana de la garantía constitucional del derecho a la defensa, consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de toda persona a tener una defensa jurídica en la forma que la ley señala y sin que "ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida".

Tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, el derecho a defensa jurídica o "defensa técnica" que esta norma constitucional consagra, incluye, como una de sus expresiones fundamentales, el secreto profesional del abogado. Sólo a través del secreto profesional se brinda adecuada protección a las comunicaciones entre el abogado y su cliente, de modo que cualquier acto u omisión que lo vulnere o amenace debe ser entendido como un impedimento, restricción o perturbación a la intervención del letrado y, por ende, a la garantía misma.

En consonancia con esta idea, el Código de Ética del Colegio de abogados previene en su artículo 46: Deberes que comprende el deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad comprende: a) Prohibición de revelación. El abogado debe abstenerse de revelar la información cubierta por su deber de confidencialidad,

así como de entregar, exhibir o facilitar el acceso a los soportes materiales, electrónicos o de cualquier otro tipo que contengan dicha información y que se encuentran bajo su custodia; b) Deberes de cuidado. El abogado debe adoptar medidas razonables para que las condiciones en las que recibe, obtiene, mantiene o revela información sujeta a deber de confidencialidad sean tales que cautelen el carácter confidencial de esa información; y c) Deber de cuidado respecto de acciones de colaboradores. El abogado debe adoptar medidas razonables para que la confidencialidad debida al cliente sea mantenida por quienes colaboran con él.

De la norma del Código de Ética se desprende que el secreto profesional es tanto un deber como un derecho. Esta última dimensión parece ser la más evidente, desde que la Constitución lo regula como una garantía a la que debe protección. Pero para hacer efectiva esa protección se hace imprescindible que el ordenamiento jurídico contemple mecanismos que hagan del respeto a la garantía un imperativo cuya infracción conlleve la imposición de sanciones. Esa dimensión imperativa o deber de respeto hacia el secreto profesional es la que consagra el artículo 231 del Código Penal, que sanciona al abogado que lo infrinja y que se hace especialmente aplicable a los funcionarios públicos en el artículo 247 del mismo Código.

En lo que respecta a los profesionales del CDE, lo anterior se ve expresamente ratificado por la propia Ley Orgánica de este Servicio. En efecto, el artículo 61 del D.F.L N° 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, prescribe que: "Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndole aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal".

De acuerdo a esta norma, los funcionarios y profesionales de este Servicio se encuentran obligados por ley a mantener reserva de los antecedentes de que conozcan en el desempeño de sus funciones, respecto de los casos en que éste intervenga, bajo las sanciones penales que protegen el secreto profesional.

La aplicación de esta obligación legal en relación a la solicitud efectuada por usted resulta evidente, especialmente cuando lo solicitado consiste, precisamente, en datos o información recibida o elaborada en el desarrollo de la gestión profesional desplegada por los abogados del CDE en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el haber asumido esta representación, de modo que la divulgación de la información por Ud. solicitada, no sólo se encuentra vedada por la propia ley, sino

que es sancionada, además, como constitutiva de delito por la Ley Orgánica de este Servicio, circunstancias que se mantienen vigentes más allá del término del proceso judicial correspondiente, dado que a ello obliga precisamente el secreto profesional, como se ha explicado.

Conforme a lo expuesto, cabe señalar que la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 28 de noviembre del año 2012, resolvió en el mismo sentido una serie de recursos de queja entre el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo para la Transparencia y determinó que los antecedentes que maneja este Servicio están cubiertos por el secreto profesional de los abogados negándose su acceso público.

La sentencia recayó en los roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012, todos de la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los señores ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Emilio Pfeffer, y resolvió tres recursos de queja en contra de distintas salas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que analizaron sendas peticiones de acceso a los antecedentes que manejaba el CDE para representar al Estado en distintos litigios, estableciendo que los antecedentes que son entregados al CDE para representar los intereses de los distintos organismos fiscales se encuentran cubiertos por el secreto profesional de los abogados y, por lo tanto, se debe negar su acceso público y mantenerse en reserva.

Por otra parte, cabe hacer presente a usted que si bien es efectivo que los sumarios administrativos totalmente tramitados son públicos, ello aplica en cuanto la solicitud de información se efectúe a la entidad a la que usted pertenecía y que tramitó el sumario correspondiente. En este sentido, es pertinente aclarar que este Servicio no cuenta ni es su obligación contar con los sumarios administrativos tramitados por los organismos que componen la Administración del Estado. Lo que ocurre en el caso judicial por el que usted consulta en el numeral primero de su presentación es que el Consejo de Defensa del Estado, como ente encargado de la defensa de los intereses fiscales, para llevar adelante correctamente una defensa en juicio, debe contar con los antecedentes que permitan efectuar esta defensa adecuadamente y recibe estos antecedentes con el resguardo que otorga el secreto profesional de los abogados, obligación que no puede quebrantar, menos aun con su contraparte en juicio, cual es su caso.

Sin perjuicio de lo anterior, usted puede solicitar copia del sumario administrativo requerido y de la demás información relativa al mismo a Carabineros de Chile.

En cuanto a la información requerida en el numeral segundo de su solicitud, reiteramos los argumentos ya señalados anteriormente, sin perjuicio de lo cual, comunicamos a usted que esta información no ha sido recibida por el CDE.

Saluda atentamente a Ud.,



MARIA EUGENIA MANAUD TAPIA
Presidenta Subrogante
Consejo de Defensa del Estado

MVC/bvr

Distribución:

1. Destinatario
2. Archivo Presidencia
3. Archivo Defensa Estatal
4. Oficina de Partes